

PROPOSICIÓN NO DE LEY SOBRE LA CONDENA DEL ASESINATO DE LA ACTIVISTA HONDUREÑA BERTA CÁCERES

El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, en el ámbito de las relaciones y acuerdos bilaterales entre el Reino de España y la República de Honduras, así como en el ejercicio del mutuo respeto a sus respectivas independencias, democracias representativas, instituciones y sus marcos legislativos:

1. Traslade al Gobierno de la República de Honduras la condena y la preocupación de la sociedad española por la muerte de la líder de la comunidad lenca, Dña. Berta Cáceres, y otros activistas sociales y medioambientales que están ocurriendo en este país.
2. Ponga a disposición de la República de Honduras todos los medios necesarios en relación con la investigación que anunció el presidente hondureño, el Sr. D. Juan Orlando Hernández Álvaro, al objeto de esclarecer de forma inmediata dicho asesinato, permitiendo de esta manera el enjuiciamiento de los autores materiales e intelectuales y evitando la impunidad ante tan atroz crimen.
3. Active cuantos mecanismos de colaboración internacional sean necesarios entre el Reino de España (haciéndolos extensivos a la UE), con la República de Honduras y terceros países centroamericanos que permitan colaborar en la lucha contra los asesinatos de activistas sociales y medioambientales en dicha zona y en cuales otros en las que fuera necesaria la colaboración española.
4. Solicite un informe a la Comisión de Expertos en aplicación de los convenios y las recomendaciones de la OIT sobre el seguimiento del convenio 169, ratificado por ambos estados, y sobre violación de derechos, la realización de consultas previas, y su seguimiento y protección posterior.
5. Ponga a disposición de la República de Honduras todos los medios disponibles para la implementación de las medidas de seguridad oportunas, que permitan salvaguardar el cumplimiento de las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a los defensores y defensoras de los Derechos Humanos. Incluyendo al testigo de los asesinatos, el Sr. D. Gustavo Castro y las familias de los activistas asesinados.
6. Se generen -o apliquen los ya existentes- instrumentos de colaboración que garanticen la protección del medio ambiente y los Derechos Humanos de las comunidades, en especial las comunidades indígenas dada su situación de especial vulnerabilidad.
7. Impulse, adopte y dé publicidad a un Plan renovado de Empresas y Derechos Humanos que, siguiendo el mandato de la PNL 161/318 aprobada en la Comisión de Cooperación Internacional para el desarrollo de esta cámara en la presente legislatura, promueva el cumplimiento de los Derechos Humanos en terceros países por parte de empresas de origen español.